

Ello supone que lo contrario a políticas frentistas son políticas basadas en la búsqueda de consensos para abordar lo que se consideren problemas básicos de la sociedad. Y supuestos esos acuerdos fundamentales, que posiblemente obliguen a todos a flexibilizar sus puntos de vista, libertad de los gobiernos para hacer sus propuestas con el control del Parlamento y de los jueces.

La alternativa al "frentismo" no es la "transversalidad" o, al menos, no lo es cualquier forma de "transversalidad". Personalmente, este término no sé muy bien qué quiere decir, y el Diccionario de la Real Academia no ayuda a entenderlo, pues no incluye la palabra. Evidentemente, la cosa suena a "transversal", cuyo sentido primero es "que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro". ¿Sería transversalidad, en lo que ahora importa, un Gobierno en que se cruzan nacionalistas y no nacionalistas: una Consejería de un color y otra de otro? Ciertamente, si ello supone que unos y otros aplican exclusivamente su política en los terrenos en que son responsables, igual no se solucionan mucho las cosas.

¿Fueron "transversales" los gobiernos de Ardanza mientras en ellos estuvieron los socialistas? Si tenemos en cuenta que las políticas decisivas no fueron resultado de acuerdos sino de imposición de los nacionalistas (véase *Fé de vida*, el extraordinario libro de memorias de José Ramón Recalde), se ha de convenir que, aunque aquella coalición matizó una política de exclusivismo nacionalista, no supuso la revisión de sus fundamentos. De hecho, las aguas patrióticas volvieron a su cauce con redoblado impulso pese a los años en que el Gobierno Vasco tuvo consejerías de distintos colores.

Lo positivo no es que haya nacionalistas y no nacionalistas en el mismo Gobierno. Si los colores de cada franja no se ven afectados por el hecho de estar juntos, las políticas basadas en la intransigencia seguirán manteniéndose. Lo que es necesario no es tanto repartir responsabilidades, cuanto revisar esencialismos e intransigencias. Y construir un acuerdo sobre las cuestiones básicas, (política ante los violentos, educación, cultura...), sobre el que se asiente el nuevo contrato social.

El cambio en los principios y en los valores

Rafael Aguirre Monasterio

La democracia no es el estado natural de la condición humana, sino que exige un duro aprendizaje. Está en juego el uso de la libertad, logro bisoño y siempre amenazado del ser humano, y la consiguiente emergencia del individuo de los condicionamientos del grupo primario de pertenencia. En Euskadi la tarea es particularmente difícil. La resistencia contra la dictadura no es la mejor escuela de democracia, porque fomenta en unos la aceptación pasiva de las imposiciones y en otros, en los resistentes, las ideologías políticas fuertes; y en nuestro caso favoreció y prestigió los elementos más duros del nacionalismo vasco, que ha ido impregnando culturalmente el cuerpo social, mucho más allá de sus adherentes propiamente dichos.

Tras la transición democrática, todos los gobiernos del País Vasco han sido nacionalistas o han estado hegemónizados por ellos. Tras el primer período, el de la puesta en marcha, vino la etapa Ardanza con la coalición con los socialistas y, después, el giro soberanista, con la estrategia centrada en el acuerdo con los sectores que se aglutinan en torno a ETA y la marginación de los no nacionalistas, que ha caracterizado a los diez años de Ibarretxe. Pero más allá de los avatares de los gobiernos, hemos asistido al contagio por doquier de la cultura nacionalista, a la imposición de sus símbolos, de su lenguaje, de sus "guiños", en toda la vida social. Todos hemos visto el fenómeno de recién llegados a esta tierra que se adherían de forma ostensible y entusiasta al nacionalismo, tanto en lo político como en lo simbólico, como forma de asegurarse la aceptación social. Otros pensaban que las cesiones a la cultura del nacionalismo serviría para apaciguar el frenesí impositivo, expresado, sobre todo, por ETA y su entorno. Hoy está claro que se equivocaban: alimentaban las quimeras de la bestia. El caso es que más allá de las normas jurídicas y penales, se han impuesto, en buena medida, unas normas sociales nacionalistas, de manera que quien no se ajustaba a ellas quedaba estigmatizado, era un desviado social. La cosa empezaba por el lenguaje. La palabra "España" es

maldiva y pronunciarla sonaba como una blasfemia en el locutorio de un convento de monjas de clausura. Se suele sustituir por "el estado" con un uso frecuentemente ridículo e inapropiado. Algunos reivindicamos la ikurriña durante la dictadura, con riesgos importantes a veces, pero lo que no podíamos sospechar era que los que habían sufrido el destierro de la enseña vasca iban a desterrar la española.

El problema es de sentimientos y de formas de pensar. La exacerbación identitaria en Euskadi ha llevado a la estigmatización del diferente, del no nacionalista, de modo que "español", "estatalista" o "unionista" se han convertido en estereotipos negativos. El estigma es denigratorio; supone el no ajustamiento a los parámetros sociales de aceptación establecidos o, mejor, impuestos. Como dice el sociólogo estadounidense E. Goffman, los estigmas que dicen relación a la identidad grupal son estigmas tribales. En efecto, el gran problema en Euskadi ha sido que los lazos de la tribu, de la sangre (a estas alturas, mitológicamente establecidos) han prevalecido, con mucha frecuencia, sobre la humanidad compartida y, por supuesto, sobre las relaciones basadas en la ciudadanía.

Pienso que la deriva del nacionalismo durante esta última etapa no ha sido solo política, sino, sobre todo, ideológica y moral. ETA ha condicionado negativamente toda la vida social: ha causado enormes sufrimientos a muchos, pero al nacionalismo vasco en su conjunto le ha introducido un virus especialmente letal, sin que se diese cuenta y, a veces, aceptándolo como un euforizante ideológico. Algunos pensarán que gracias a ETA el nacionalismo vasco ha conseguido réditos políticos y probablemente es verdad, pero al precio de una contaminación ideológica y moral, cuyas consecuencias pagará muy caro en el futuro. La exacerbación del nacionalismo en la etapa de Ibarretxe –arruinando las mejores posibilidades de su tradición y dando pábulo a una visión mitológica insostenible del "pueblo vasco"– ha llevado a muchos a abrir los ojos y, sobre todo, a formular una teoría alternativa a la que iba produciendo –¿quién estaba detrás?– el nacionalismo vasco desde Ajuria Enea. El "ser para decidir", aprobado a la búlgara por unanimidad, encendió todas las alarmas y no podía dejar indiferentes a quienes se dedicaban a la tarea de pensar, no ya por sentido de la responsabilidad, sino porque estaba en juego literalmente su propia supervivencia personal en libertad en Euskadi. "Ser para decidir" era la invocación programática de una identidad uniforme a imponer a toda la sociedad vasca.

En el campo no nacionalista se ha pasado de una etapa de denuncia y resistencia a otra propositiva y positiva, caracterizada por la elaboración de un programa político en torno al concepto de ciudadanía, que suponía una crítica radical del nacionalismo, pero no se enfrentaba con él en su mismo plano. Se situaba en un momento anterior, el del reconocimiento de la igualdad de todas las personas ante la ley, el de la condición de ciudadanos, que a todos iguala, que no pretende ahorrar ni unificar las identidades ni las ideologías, sino fundar el respeto y la aceptación de los diferentes. Naturalmente esto implica una relativización en la esfera pública de las identidades, de las ideologías y de las creencias; si se me permite la expresión, se trata de "civilizar" las identidades, ideologías y creencias, lo que no supone ni su abolición ni desconocer la importancia que pueden tener para sus adherentes, aunque sí se les exija una reacomodación y, en muchos casos, reformulación para poder hacerse presentes en el espacio público de la ciudad democrática. Es el respeto de la democracia, que hace posible la vida en común, que no se basa en las vinculaciones de la sangre como la tribu, sino en las instituciones democráticamente establecidas.

Mientras el entorno de Ibarretxe se enrollaba en un discurso insostenible intelectualmente, reiterativo hasta el aburrimiento, expresado en todos los foros, a veces sin el menor sentido de la oportunidad, caminando por un callejón sin salida, se ha ido configurando otro discurso alternativo, basado, como digo, en el concepto de ciudadanía, y en cuya elaboración –dato importante y no hace falta que cite nombres– han tenido un protagonismo decisivo intelectuales muy cualificados procedentes del nacionalismo y que, por eso mismo, lo conocen muy bien y han sido capaces de analizarlo de forma especialmente penetrante. Cuando se habla de ciudadanía se está diciendo que un nacionalismo no se cura con otro nacionalismo. Hoy es evidente que si no se es nacionalista vasco no hay por qué ser nacionalista de otro signo. Las primeras manifestaciones del gobierno vasco presidido por el lehendakari López me parece que lo han puesto de manifiesto de forma meridianamente clara. El pueblo vasco ha dejado paso a la sociedad vasca, la preocupación identitaria ha dado paso a la defensa de las instituciones democráticas. El nacionalista vasco podrá no estar de acuerdo, pero no puede negar los hechos y no debería errar el tiro: se está confrontando con la democracia simplemente.

Por eso creo que el cambio de gobierno ha supuesto un notable cambio de cultura política. El nacionalismo en el poder y con la presión de ETA, que le disputa la hegemonía en su campo ideológico, no ha sido capaz de

reformular sus postulados para adecuarlos –como han hecho todos los demás partidos, con mayores o menores dificultades- a una situación democrática y abandonar los lastres ideológicos decimonónicos y resistencialistas. Sospecho que llegará un día en que la etiqueta “nacionalista”, que hoy tantos ven como timbre de gloria, caiga en un profundo desprestigio. En todo caso, hay que decir que la democracia exige una educación de las mentalidades, de los hábitos y de los sentimientos, que en el ser humano no son meras fuerzas instintivas e irracionales. Una fe religiosa no mediada por la razón es un peligro enorme, como un sentimiento nacional (así se suele presentar, ante todo, el nacionalismo) no controlado por la razón crítica lleva fácilmente a la subyugación por un líder más o menos demagógico y a justificar los peores desvaríos. Quiero subrayar que es posible y necesario educar los sentimientos, porque son especialmente manipulables y muchos recurren a ellos, como si fuese un dato inmodificable de pura naturaleza para justificar sus actitudes librándose de la necesidad de justificarlas racionalmente, aunque su educación pueda ser una tarea especialmente compleja.

Pero hay otro aspecto: que la sociedad vasca pierda su complejo ante el nacionalismo, que se normalice el reconocimiento como vascos tanto de los que son como de los que no son nacionalistas. La norma social, tanto tiempo vigente, de vasco igual a nacionalista, que dictaba lo político y socialmente correcto, debe dejar de ejercer un control totalmente injustificado en una sociedad democrática, para que todos podamos expresarnos con libertad.

Ya he explicado que sostengo que el cambio político en Euskadi implica un cambio de cultura política y el gran reto es asentarla, de modo que perdure más allá de las futuras alternancias en el gobierno. En esta tarea nos jugamos la culminación de la transición democrática en Euskadi, el reconocimiento efectivo de las instituciones democráticas y la penetración de los correspondientes hábitos democráticos en la población. Propongo una serie de valores y principios que hay que promover, sin ánimo de ser exhaustivo ni tampoco de enumerarlos en orden jerárquico.

-Educar en una ciudadanía crítica. Una sociedad se basa en el reconocimiento de los ciudadanos que la componen, como iguales en derechos y deberes, a la vez que se respetan sus legítimas diferencias ideológicas, religiosas etc. Si la tribu se basa en la vinculación de la sangre y ejerce un control estricto sobre el comportamiento de sus miembros en ámbitos muy diversos de su vida, la

sociedad se basa en las normas de derecho, en última instancia en el valor supremo de la vida de cada persona, centro y fin de la vida social, y por tanto respeta el ejercicio diferente de la libertad de cada uno de sus miembros. La ciudadanía exige educación, no quedar encerrados en los grupos primarios y adquirir la capacidad de participar en una vida social amplia, plural y heterogénea. El espíritu ciudadano es necesariamente crítico porque no se basa en adhesiones primarias y supuestamente naturales, sino que requiere capacidad para tomar distancia de ellas y discernir entre las diversas propuestas que en un momento determinado se ofrecen para la organización de la vida social. Ciudadanía es autonomía personal. El espíritu ciudadano exige aceptar, reconocer y defender las instituciones que la sociedad democráticamente se da. La ciudadanía implica igualdad y respeto a las diferencias. El ciudadano no sigue meras consignas, ni banderas porque sí, participa y no es un mero súbdito que obedece. La ciudadanía no se expresa normalmente a través de grandes liturgias políticas, que desatan fuertes emociones colectivas. El nacionalismo vasco, con frecuencia, tiene más los visos de una religión de sustitución que no las características de un proyecto político ciudadano; es decir, tendrá que transformarse y dejar de aspirar a colonizar y modelar a toda la población, sino verse y aceptarse como una propuesta – para ellos la mejor- pero entre otras con la misma legitimidad. Tanto el comunismo como el nacionalismo suelen hablar de “el partido”, con artículo determinado, sin necesidad de más explicaciones y como si no hubiera otros: es un indicio claro del afán totalizador y de que se acepta el pluralismo porque no hay más remedio, como un mal, como algo que hay que convertir (en el mejor de casos) a destruir; no se ve el pluralismo identitario e ideológico como rasgo inherente de una sociedad libre.

-Superación del fanatismo. Se sigue de lo dicho anteriormente, pero conviene subrayarlo, porque ETA es, ante todo, un fenómeno de fanatismo que obnubila la mente y endurece el corazón. Su matriz ideológica es un nacionalismo exacerbado. Y lo peor es que este fenómeno se extiende, más allá de sus activistas, a un sector social relativamente amplio que les apoya explícitamente y a otro sector, de contornos más difusos, que aún estando en desacuerdo con ellos –a veces muy radicalmente- le cuesta enfrentarse con toda decisión porque existen vinculaciones ideológicas, más o menos subterráneas, con las que les duele mucho romper. Todas las ideologías tienen proclividades perniciosas. Hemos asistido al derrumbamiento de varias de ellas. Al nacionalismo vasco le cuesta reconocer que ETA es una excrescencia de sus postulados esenciales y que desarrolla posibilidades intrínsecas de los mismos.

La persistencia del fanatismo exige una labor educativa, una vigilancia para que no se adoctrine en él en los centros educativos, que se fomente el espíritu crítico en la propia ideología y en el estudio de la historia, que no se toleren las liturgias políticas que fomentan el fanatismo, que se ponga el valor de la persona por encima de cualquier ideología.

- *La libertad* es el primero de los valores de la cultura política renovada. La libertad que tiene su punto de partida en el individuo concreto, que es capaz de emerger y no quedar subsumido ni en la especie ni en el grupo. En el País Vasco existe un marco jurídico de libertades plenamente homologable con las democracias más avanzadas, pero, sin embargo, la situación política es tal que impide en la práctica un ejercicio suficiente de la libertad a muchos miles de ciudadanos. En efecto, ETA asesina, amenaza, extorsiona, chantajea, hace vivir con miedo, tomar medidas de protección, muchos son quienes han llegado, por todo esto, a tener que abandonar el País Vasco. Los partidos no nacionalistas han estado y están en condiciones mucho peores para ejercer su actividad. En amplias zonas de nuestro país dar la cara públicamente como miembro de un partido no nacionalista se convierte en un acto heroico sin eufemismo alguno. Conquistar la libertad supone, ante todo, acabar con ETA, pero también con las manifestaciones chulescas de su entorno, con la mafia extorsionadora que campa por sus respetos por barrios y pueblos, con las plataformas de socialización en el fundamentalismo etarra que aún existen (en la enseñanza, en grupos juveniles, en locales alternativos o de diversión etc). Hay mucha tarea por delante para poder decir que en el País Vasco existe, en la práctica, un grado de libertad homologable a las democracias occidentales. Esta afirmación sonará exagerada a quienes ni ellos ni las personas de su entorno han sentido la amenaza de ETA. Los miembros del actual gobierno sí han sentido en sus propias carnes lo que es la falta de libertad en la vida cotidiana, lo que implica el no poder ir tranquilamente a comprar el pan o llevar los hijos al colegio o usar el coche sin tomar mil medidas previas de precaución, y por eso harán de la conquista de la libertad un objetivo prioritario. La libertad exige que desaparezca el miedo y la "norma social" que dicta lo socialmente correcto con criterios nacionalistas y excluyentes.

-*El respeto a la persona individual* es el valor moral central que funda la convivencia. Antes lo he dicho con otras palabras. El respeto es, ante todo, a su vida, valor primero y fundamental; pero también respeto a sus actitudes e ideas, dentro siempre del marco de los derechos humanos y de la legalidad. No es cierto eso que tanto se suele repetir de que "todas las ideas

son legítimas y se pueden defender". En mi opinión, en una democracia hay muchas razones para prohibir la promoción de proyectos xenófobos, racistas, machistas o basados en ideas criminógenas. Una sociedad de personas libres es necesariamente plural y esta pluralidad es una riqueza, aunque, sin duda, hace más compleja y hasta difícil la vida social. La pluralidad enriquece porque presenta diversidad de ideas, de proyectos vitales, nos obliga a repensar nuestras posturas, amplía nuestro horizonte siempre limitado. Precisamente la política requiere articular la convivencia plural. Los proyectos totalitarios aspiran a una sociedad tan perfecta, tan uniforme, que supondría la superación o eliminación de la política como la dialéctica de la diversidad. Respetar al otro implica capacidad de escucha, de valorar sus argumentos, de ponernos en su situación, la disposición a modificar nuestros puntos de vista y a defenderlos siempre con razones. Nunca se trata de aniquilar a la persona del otro y, en la vida política, normalmente es mejor llegar a consensos, que obligan a ceder a todos pero en los que todos podemos reconocernos, que no aspirar a imponer totalmente nuestros propios puntos de vista.

-*Empatía política con los que sufren.* No estoy hablando de la mera conmoción sentimental ante una desgracia que nos encontramos en nuestro camino o que nos asalta desde la pantalla de la televisión. Me refiero a la repercusión política de los sufrimientos del prójimo, sobre todo de los sufrimientos injustos. Ante todo una observación: la política no pocas veces inmuniza ante el sufrimiento concreto, porque lo suyo es la preocupación por lo estructural, porque es una actividad en la que, con frecuencia, las luchas por el poder endurecen la piel para arrostrar sin pestañear conflictos interpersonales. No es raro que compañeros que han trabajado políticamente juntos durante muchos años llegue un momento en que se distancian y se ignoran. Además se puede traficar desgraciadamente en política con el sufrimiento de los seres humanos. Es muy diferente el discurso ideológico sobre cualquier tipo de sufrimiento o el discurso que parte de la experiencia personal y no se despega de ella, por mucho que lógicamente tenga que remontarse a medidas estructurales para remediárlas. Maite Pagazartundúa hablaba de "políticos de corazón de hielo". Se refería obviamente a la actitud que tantas veces han tenido con las víctimas del terrorismo. Arzallus tras escuchar las palabras de la madre de Maite, después del asesinato de Joseba su hijo, no tuvo mejor comentario que decir: "alguien le habrá escrito estas palabras a esta pobre mujer".

Mucho ha ido cambiando la actitud de la sociedad vasca ante las víctimas del terrorismo y no hace falta que entre aquí en detalles. Pero estamos aún muy lejos de que los asesinatos de ETA produzcan una conmoción pública, que involucre a toda la población y como una ola potente arrastre y limpie a toda la sociedad vasca. Hay mucha comodidad y pasividad; durante muchos años se ha mirado para otro lado y no se ha querido ver lo que pasaba entre nosotros, desde luego no se ha querido descubrir la hondura de la degradación moral en que nos encontrábamos sumidos; hay quienes gradúan su capacidad de movilización social no en proporción a la barbarie y el sufrimiento ante el que hay que reaccionar, sino en función de sus cálculos partidistas. La sociedad vasca, como las sociedades occidentales en general, pero con preocupantes características propias, se encuentra llena de miedos a perder privilegios, es profundamente comodona y la exagerada fragmentación del ámbito político, consecuencia, ante todo, del ensimismamiento y radicalización ideológica del nacionalismo, hace que las reacciones unitarias ante el terrorismo, ante el sufrimiento de sus víctimas, sea normalmente flor de un día que se marcha muy pronto en medio de discursos y disculpas llenas de mezquindad y miseria.

Pero lo peor es que en esta sociedad la metástasis etarra se ha extendido y ha hecho estragos. A las 72 horas de un crimen, miserables cálculos políticos prevalecen sobre una unidad prepolítica, de carácter moral, que debería ser la guía común en la confrontación con el terrorismo etarra, que exige una actitud firme, permanente y multidireccional para atacar al fenómeno en todos sus aspectos y manifestaciones (policial, judicial, educativo, político). Desearía que la nueva cultura política genere una dinámica que haga imposible desmarcarse –porque tendría un coste político demoledor– de la tarea de regenerar moralmente la sociedad vasca en sus bases más elementales.

Para terminar diré –y la observación general tiene una validez especial en tiempos de crisis como los que nos está tocando vivir– que la empatía con el sufrimiento creo que es la motivación más honda que puede impulsar a la acción política. Cuando esto sucede nos encontramos con lo que bellamente Blas de Otero llamaba “amor en frío”. A la poesía no hay que tocarla, explicarla es estropearla, pero, en este caso, me tomo la licencia de decir que “amor en frío” no es lo mismo que amor frío. En la sociedad vasca nos sobran calentamientos políticos y nos faltan comportamientos políticos democráticamente coherentes, no sectarios y efectivamente solidarios, día a día, con la libertad vista desde el punto de vista de quienes más han sufrido por ella.

La libertad de identidad, una carencia hispánica

José María Ruiz Soroa

Libertad e identidad son dos conceptos que, a primera vista, parece que deberían poder marchar en perfecta concordia en el marco de las democracias liberales que vivimos. En efecto, si la libertad humana consiste en algo concreto, consiste en primer lugar en el derecho de cada uno de desarrollar su propia identidad personal.

La libertad de los modernos nació en la historia como libertad de conciencia. Cuando los nacientes Estados europeos se convencieron, tras un siglo de violencia, de la imposibilidad de imponer a sus minorías religiosas el credo mayoritario nació la tolerancia para con las diversas adscripciones. Y de la tolerancia derivó la libertad de conciencia, que no significó en definitiva sino el reconocimiento por parte del poder público de la existencia de un ámbito personal blindado, el ámbito de la conciencia de cada individuo. Lo formuló con notable precisión la Declaración de Independencia de 1776 en unos términos que van mucho más allá de lo meramente religioso: se proclama allí que todos los hombres poseen, además del derecho a la vida y la libertad, el derecho a la búsqueda de la felicidad, una formulación típicamente ilustrada que pretende expresar una idea muy simple: cada uno es libre de formularse su propio ideal de vida buena, y es también libre para perseguirlo adecuadamente. O, dicho en negativo, el gobierno no es quien para establecer cuál sea la vida buena y menos aún para obligar a nadie a amoldarse a esa visión. Incluso si ello se hiciera benévolamente por un gobierno paternalista que supiera cuál es la felicidad de los ciudadanos, escribe KANT que tal cosa constituiría “el mayor despotismo imaginable” pues supondría tratarles “como menores de edad”.

No existe hoy en día Constitución positiva que no proclame como uno de los primeros derechos de que gozan los ciudadanos el de libertad ideológica, religiosa y de creencias, como puede verse en el art. 10 de la española que declara “el libre desarrollo de la personalidad” como valor que fundamenta